



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCION No. 2283

**"POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"**

**LA DIRECTORA LEGAL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
AMBIENTE**

De conformidad con Ley 99 de 1993, el Decreto 1618 de 1978, el Decreto 1594 de 1984, el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1791 de 1996, las disposiciones contenidas en el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, en los Decretos Distritales 561 del 29 de diciembre de 2006 y Decreto 472 del 23 de diciembre de 2003 y la Resolución No 110 del 31 de enero de 2007,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que por medio de Radicado No. **2004ER40994**, del día 24 de Noviembre de 2004, la señora **AMIRA RODRÍGUEZ** y otras, solicitan ante la Oficina de Quejas y Reclamos – Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, se adelante el respectivo tratamiento silvicultural de un individuo arbóreo de la especie **PINO** que aparentemente se encontraba cercano a los cables de la luz, generando de ésta manera cierta peligrosidad en la Carrera 85 No. 62 A-26 Interior 36, barrio LA ISABELA, localidad de Engativá de ésta ciudad.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, Subdirección Ambiental Sectorial del DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente, efectuó visita



1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

2 2 8 3

técnica el día **14 de Marzo de 2005**, plasmada en el Concepto Técnico No. **2958** del día **18 de Abril de 2005**, a fin de atender la solicitud efectuada, en la cual se determinó la tala sin autorización de **(1) árbol** de la especie **PINO**.

Que Mediante radicado 40606 de 2004, se estableció medida de compensación, de acuerdo con el Decreto 472 de 2003 y el concepto técnico No. 3675 de día 22 de Mayo de 2003, por medio del cual se define la tabla de valores por IVPs donde el infractor deberá garantizar la persistencia del recurso forestal mediante el pago de 1,86 IVPs, equivalentes a \$ 191.219 (0,50 SMMLV).

Que el día 25 de julio de 2005 compareció a ésta Entidad Ambiental el señor **GUSTAVO SUESCA**, con el fin de rendir versión libre sobre los hechos que lo acusaban como presunto infractor de la normatividad ambiental referente al caso en concreto. En ésta diligencia reconoció haber talado de manera antitécnica el pino, toda vez que sus ramas obstaculizaban las cuerdas telefónicas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial, las señaladas en el artículo 8º, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79 Ibídem, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 Constitucional, le asigna al Estado el imperativo de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, generando desarrollo sostenible, conservación y restauración o sustitución de estos. Atribuye también como responsabilidad estatal la prevención y control de agentes de deterioro ambiental, y que en cuyo caso, se configura la potestad sancionatoria como un mecanismo de protección frente al quebrantamiento de normas ambientales, y que consecuentemente hace exigible el resarcimiento de los daños originados.

Que de acuerdo con las disposiciones Constitucionales, nace para el Estado, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y la



2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

2 2 8 3

diversidad e integridad del ambiente, por cuanto, la carta política de Colombia, prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, correspondiéndole planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, "*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio*"; y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.

Que de acuerdo al concepto técnico **No. 2958 del 18 de Abril de 2005**, anteriormente relacionado, se evidenció la **tala sin autorización de (1) árbol de la especie Pino**, contraviniendo de ésta forma la protección forestal ambiental, conllevando como resultado un deterioro ambiental, lo cual amerita el inicio y posterior desarrollo de trámites de carácter investigativo y sancionatorio respecto de los presuntos infractores, situación que no se llevó a cabo por parte del Departamento Administración de Medio Ambiente - DAMA, hoy Secretaria Distrital de Medio Ambiente - SDA.

Que el Decreto 1594 de 1984, define el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo



3



dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que: *"Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas."*

Que sobre esta materia, vale la pena recalcar la posición del H. Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 4438, MP. Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, frente a la caducidad relacionada con el hecho puntual en el tiempo y el transcurso del mismo por más de los tres (3) años a que se refiere el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

(...) "Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean solo el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la Ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable, debe interpretarse que teniendo en cuenta las normas que dicta el Legislador deben producir los efectos en ellas previstos, y en tal sentido, cuando se hace referencia a la caducidad de la acción prevé el ejercicio de la autoridad administrativa en la medida que también produzca efectos en derecho, es decir, mediante la expedición dentro del término de tres años previsto de manera general en la norma " (...).

Al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó:

*"(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, **por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor.**" (...)*
Resaltado fuera del texto original.

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:





(...) "Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: " (...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa⁵..." (Subrayado fuera de texto).

Que así las cosas y, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y, las instrucciones impartidas a través de la Directiva No. 007 de 2007 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se deduce que la administración, para el caso en concreto, disponía de un término de 3 años contados a partir de la fecha en que conoció de la queja de la tala sin autorización, esto es, desde el **24 de Noviembre de 2004**, para la expedición del acto administrativo de sanción, su notificación y debida ejecutoria, trámite que no se surtió, operando de esta manera el fenómeno de la caducidad.

Que, siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, este culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

En igual sentido, el Doctrinante Luis Alfonso Acevedo Prada, en su obra "Caducidad, Prescripción, Perención, Preclusión y Términos" Primera edición 2004, expreso al respecto de la caducidad lo siguiente:





(...) "Ahora bien, en la caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno derecho, sin necesidad de que el interesado en beneficio de sus efectos la alegue o proponga como defensa exceptiva. El funcionario competente en el juzgamiento pertinente, no solo debe sino que está obligado a declararla sin necesidad de petición de parte" (...)

Que la Constitución Política determina parámetros obligacionales respecto de la conservación de recursos forestales, así mismo el Decreto No. 472 de 2003 y el Concepto Técnico No. 3675 del 22 de Mayo de 2005, define la tabla de valores de cobro por IVP's (Individuos Vegetales Plantados), respecto de la persona que hace uso de cualquier recurso forestal debiendo garantizar la persistencia del mismo mediante el pago de IVP's determinado por el concepto técnico pertinente para cada caso en concreto.

Que si bien es cierto, de acuerdo en el caso que nos ocupa, se determina la caducidad de la facultad sancionatoria, por otra parte se hace viable el pago de la compensación en aras de proteger la persistencia del recurso forestal, ya que legalmente se encuentra dentro de los términos normativos para ser exigible, toda vez que el Estatuto Tributario determina en su Artículo 817 subrogado por la ley 788 de 2002 artículo 86 "...el término de la prescripción de la acción de cobro es de 5 años..." en concordancia con el artículo 66 de la ley 383 de 1997, respecto de las entidades territoriales. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la confesión dada por el señor **GUSTAVO SUESCA** mediante versión libre ante ésta Entidad Ambiental fue el día **25 de julio de 2005**, se encuentra exigible la obligación de pago de la obligación dada por la tabla de compensación según concepto técnico No. 2958 del 18 de Abril de 2005, por un valor de **\$191.219 (0.50 SMLMV)**.

Que el artículo sexto del Decreto 561 del 29 de diciembre de 2006, literal l) asigna al Despacho de la Secretaría la función de conocer en única, primera y segunda instancia, los asuntos que sean de su competencia.

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejecutar el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

2 2 8 3

ambiental y manejo de recursos naturales, e implementar las acciones de policía que sean pertinentes para el efecto.

Que de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 1º de la Resolución No. 0110 del 31 de enero de 2007, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, mediante la cual se efectúan unas delegaciones a la Dirección Legal Ambiental, le corresponde suscribir los actos administrativos necesarios dentro de los procesos que se adelanten como consecuencia de la violación de las normas sobre protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y en consecuencia, ésta Dirección Legal Ambiental es la competente en el caso objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de las actuaciones ambientales iniciadas en el expediente **DM-08-05-1100** iniciado por el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el pago por concepto de compensación a cargo del señor **GUSTAVO SUESCA** por un valor de **\$ 191.219 (0.50 SMLMV)** de acuerdo a la parte motiva de ésta providencia.

El pago deberá consignarse en la Cuenta de Ahorros No. 001700063447 del banco DAVIVIENDA a nombre del Jardín Botánico José Celestino Mutis, relacionando el número de resolución o concepto técnico técnico.

ARTICULO TERCERO: Una vez realizado el pago deberá enviar copia del recibo de consignación con destino al expediente **DM -08-05-1100** a fin de verificar el cumplimiento de la obligación, dentro de los (20) días siguientes a la notificación de la presente resolución.



7



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

= 2 2 8 3

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente providencia a la señora Amira Rodríguez y demás vecinos del barrio La Isabela en la Carrera 85 No. 62 A- 26 Interior 36, localidad de Engativá de ésta ciudad.

ARTICULO QUINTO: Fijar la presente providencia en lugar público de esta entidad, Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.

ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente Resolución a la oficina de Control de Flora y Fauna de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de esta Secretaría para lo de su competencia.

ARTICULO SÉPTIMO: Enviar copia de la presente Resolución a la oficina de Financiera de esta Secretaría para lo de su competencia.

ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente Resolución al Jardín Botánico José Celestino Mutis para lo de su competencia.

ARTICULO NOVENO: Publicar la presente Resolución en el boletín ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO: Enviar copia de la presente Resolución a la oficina de Asuntos Disciplinarios de esta Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, para lo de su competencia.



8



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

2 2 8 3

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno conforme lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 19 MAR 2009

ALEXANDRA LOZANO VERGARA

Directora Legal Ambiental

Proyecto. MARTHA LILIANA MARTINEZ AMAYA
Reviso. Dr. OSCAR TOLOSA
Exp. DM - 08 -05-1100.



9